



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso	Ordinario Laboral
Radicación	05001-31-05-013-2020-00356-01
Demandante	Yeison Bernardo Álvarez Murillo
Demandado	Inversiones Gañan S.A.S. y Carlos Andres Pérez Gañan
Asunto	Apelación auto
Procedencia	Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente	Sandra María Rojas Manrique
Tema:	Nulidad por indebida notificación.

Medellín, junio diecisiete (17) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, decide el recurso de Apelación interpuesto por el apoderado de la parte accionada, contra el auto proferido en audiencia pública celebrada el 25 de febrero de 2022, por medio del cual se denegó la solicitud de nulidad propuesta por el mismo en el proceso ordinario laboral promovido por el señor YEISON

BERNARDO ALVAREZ MURILLO en contra de la sociedad INVERSIONES GAÑAN S.A.S., y el señor CARLOS ANDRES PÉREZ GAÑAN. Radicado 05001310501320200035601.

1. ANTECEDENTES

El señor YEISON BERNARDO ALVAREZ MURILLO llamó a juicio ordinario laboral a la sociedad INVERSIONES GAÑAN S.A.S. Y CARLOS ANDRES PÉREZ GAÑAN, pretendiendo se declare que entre la sociedad Inversiones Gañan S.A.S. y el señor Carlos Andrés Pérez Gañan, solidarios entre sí, y el actor, existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 6 de abril de 2019 hasta el 10 de julio de 2020, se declare que el vínculo laboral fue terminado de manera unilateral y sin que mediara justa causa por los accionados; se condene a éstos al pago de horas extras, recargos nocturnos, reajuste salarial, la liquidación y pago de las prestaciones sociales con base en el salario realmente devengado, al pago de la sanción por no consignación de las cesantías, a la indemnización de los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo de Trabajo, a la indexación y a lo que se pueda probar ultra y extra petita.

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto proferido el 10 de noviembre de 2020, admitió la demanda y dispuso, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, proceder con la notificación del auto admisorio de la demanda a los demandados, preferiblemente por medios electrónicos, notificación que se indicó sería realizada por el despacho y en ese sentido instó a la parte actora abstenerse de hacerlo para evitar doble radicación.

El apoderado de los accionados mediante escrito remitido al Juzgado vía correo electrónico el día 7 de abril de 2021, según se observa en el pdf 13 del expediente digital, presentó solicitud de nulidad por considerar que se presentaron irregularidades en relación a la notificación de la demanda, con las cuales se vulneró el debido proceso, solicitud que fue resuelta desfavorablemente por la Juez cognoscente en audiencia celebrada el 25 de febrero del año en curso.

2. EL AUTO RECURRIDO

La señora Juez Trece Laboral de Circuito deniega la solicitud de nulidad al concluir que el propio despacho realizó en debida forma la notificación del auto admisorio, obrando en el expediente constancia de que el mensaje se entregó a los destinatarios, recordando que, toda vez que la persona natural accionada funge a su vez como representante legal de la sociedad también convocada a juicio, se dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 300 del Código General del Proceso.

Advirtió la funcionaria, que si bien se evidenció un yerro en la dirección física señalada por la activa para notificaciones de los accionados, ello no tiene relación con la nulidad solicitada, en tanto que no se enviaron notificaciones físicas y en relación a la omisión de la parte actora de remitir copia de la demanda a los demandados previo a presentar la misma, ello fue advertido al momento de estudiarse la demanda para su admisión y fue causal de inadmisión de la misma, precediendo la parte interesada a subsanar las deficiencias.

3. APELACION DEMANDADOS

Expuso el apoderado, que la radicación del proceso fue el 22 de octubre de 2020, fecha en la cual no se notificó conforme al artículo 6° del decreto 806 de 2020, solo se notificó el auto admisorio del 10 de noviembre de 2020, siendo esta la base principal de la apelación, porque es un acto preclusivo, la Ley debe ser garantista para las demás partes, aduce que si el demandado hubiera recibido el 22 de octubre de 2020 la demanda, hubiera podido iniciar su defensa y no tuvo la oportunidad, por eso indica que es una etapa preclusiva y se debe tener presente que al momento de entregarse la demanda, no se radicó o no se demostró la intención de notificar al demandado.

Sostuvo que se presenta una violación directa al artículo 29 de la Constitución, aduciendo que las medidas deben garantizar el debido proceso y la publicidad y que en el artículo 3 del decreto ya citado, se originan actuaciones que deben ser compartidas: radicación, subsanación, entre otras y solo hasta el 10 de noviembre se notificó al demandado, resaltó que en la solicitud de nulidad se lee expresamente que al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviarse por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados y del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda se presente escrito la subsanación, reiterando que aquí se le violaron los derechos al demandado, en una etapa precluida que no se puede volver a realizar a menos que se presente otra demanda. Además, no se realizó el juramento por el interesado donde indica como obtuvo las direcciones y correos electrónicos, tampoco se realizó emplazamiento o nombró curador y si bien el demandado manifestó haber recibido la notificación, tampoco indicó en qué tiempo le llegó a él o cuando se enteró del proceso, señalando que la responsabilidad de notificar el auto admisorio del 11 de noviembre de 2020 era del demandante, por lo que la nulidad es absoluta.

4. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal no se pronunció ninguna de las partes.

5. CONSIDERACIONES

La competencia de esta corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación de conformidad con el artículo 57 de la ley 2 de 1984, y los artículos 65 y 66 del CPL y de la SS modificados por los artículos 29 y 35 de la ley 712 de 2001.

3.1. Problema Jurídico

Deberá resolver la Sala:

¿Si la omisión de la parte actora de remitir de manera simultánea a la presentación de la demanda, copia de la misma a la parte accionada, configura causal de nulidad por indebida notificación y constituye una vulneración al derecho de defensa del extremo pasivo de la relación procesal?

5.2. Tesis.

El problema jurídico se resuelve bajo la tesis según la cual, la omisión en la remisión de manera simultánea a la presentación de la demanda, de copia de la misma a los demandados, en los términos del artículo 6 del Decreto 806 de 2020, no configura causal de nulidad constitucional o legal, encontrándose la parte accionada debidamente notificada. En consecuencia, la providencia recurrida debe ser confirmada.

5.2. Premisas Normativas

El Decreto 806 de 2020, por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, dispone en su artículo 2º lo siguiente:

“Artículo 2. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los usuarios de este servicio público. Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físicos. Las autoridades judiciales darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán. En aplicación de los convenios y tratados internacionales se prestará especial atención a las poblaciones rurales y remotas, así como a los grupos étnicos y personas con discapacidad que enfrentan barreras para el acceso a

las tecnologías de la información y las comunicaciones, para asegurar que se apliquen criterios de accesibilidad y se establezca si se requiere algún ajuste razonable que garantice el derecho a la administración de justicia en igualdad de condiciones con las demás personas. “

Asimismo, el artículo 6 de la misma normativa consagra:

“Artículo 6. Demanda. La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda. Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya lugar a este. De las demandas y sus anexos no será necesario acompañar copias físicas, ni electrónicas para el archivo del juzgado, ni para el traslado. En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos. En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado. (Subraya de la Sala)

5.3. Caso Concreto

Pretende el apoderado de los accionantes, se revoque la decisión adoptada por la Juez de Primera Instancia en la audiencia celebrada el 25 de febrero de 2022 y en su lugar, se declare la nulidad de lo actuado en el proceso, por considerar que, en el trámite del proceso y principalmente, desde la misma presentación de la demanda se presentó una irregularidad, la cual se traduce en la vulneración del derecho de defensa y debido proceso de sus representados.

Advirtiéndolo la Sala, que no son de recibo los argumentos presentados por el apoderado recurrente y contrario a ello, se encuentra acertada la decisión de la a quo, lo anterior, por cuanto es claro que el alzadista persigue se dé al artículo 6 del Decreto 806 de 2020 un efecto que no consagró la norma, nótese que la misma disposición señala que la consecuencia de que la parte accionante no acredite que remitió a quien pretende demandar copia del escrito de demanda y de los anexos, es que el funcionario judicial proceda a la inadmisión o devolución de la demanda, lo que en efecto aconteció, pues se tiene que el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto del 29 de octubre de 2020, dispuso la devolución de la demanda, a fin de que entre otros requisitos, *“Acredite al despacho, de acuerdo a lo ordenado en el Decreto 806 de 2020, haber enviado, al presentar la demanda de manera simultánea, copia de ésta al demandado con sus respectivos anexos...”*

Sobre el alcance de la citada disposición, la Corte Constitucional en la sentencia C-420 de 2020, indicó:

“63. El artículo 6° del Decreto sub examine introduce tres modificaciones transitorias al régimen de presentación de la demanda. Primero, elimina la presentación física de la demanda y sus anexos (inciso 2 del art. 6°)[56]. Segundo, elimina la

obligación de presentar copias físicas y electrónicas de la demanda y de sus anexos (inciso 3 del art. 6º). Tercero, establece dos obligaciones en cabeza del demandante cuyo incumplimiento da lugar a la inadmisión de la demanda. De un lado, (i) exige que indique “el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso” (inciso 1 del art. 6º). De otro, (ii) al presentar la demanda o el escrito que la subsana, debe enviar a los demandados una copia “por medio electrónico”. En estos eventos, “al admitirse la demanda la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado” (inciso 5 del art. 6º). Si el demandante no conoce el canal digital de la parte demandada, al presentar la demandada deberá acreditar “el envío físico de la misma con sus anexos” (inciso 4 del art. 6º)”

Toda vez que la parte actora cumplió con dicho requisito y con los demás exigidos, tal y como se puede corroborar del anexo 5 del expediente digital, en el cual obra la constancia de remisión de la demanda y anexos a los demandados, a la dirección de correo electrónico capemil@hotmail.com, procedió el despacho a la admisión de la demanda.

Resalta la Sala, que la parte accionada no desconoce la dirección de correo electrónico a la cual se remitió la demanda, en forma previa a su admisión, además de que la misma corresponde a la registrada en el certificado de Cámara de Comercio de la sociedad Inversiones Gañan S.A.S, la cual está representada por el codemandado Carlos Andrés Pérez Gañan.

De igual forma destaca la Sala, que el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, dispuso expresamente en el auto admisorio de la demanda, el cual fue proferido el 10 de noviembre de 2021, que sería la propia agencia judicial quien realizaría la notificación del auto admisorio, instando a la parte actora de

abstenerse de hacerlo para evitar doble radicación, situación que en nada afecta el debido proceso y si bien es la parte actora la interesada en dicho trámite, ello no es impedimento alguno, para que la diligencia se realice por parte del juez director del proceso.

Bajo el mismo análisis, se observa en el anexo 08 del expediente digital, la constancia de notificación del auto admisorio de la demanda, diligencia que se efectuó el 11 de diciembre de 2020, a la dirección electrónica antes señalada, esto es, capemil@hotmail.com, obrado en el anexo 10 la constancia de entrega al destinatario.

Así las cosas, no hay duda para la Sala que la notificación de los accionados se realizó en debida forma y que el accionado Carlos Andrés Pérez Gañan, en su calidad de persona natural accionada y representante legal de la sociedad también demandada, conoció de la existencia del proceso y se le garantizó y respeto su derecho de defensa, presentándose una omisión de éste para dar respuesta en el término concedido.

Tampoco es de recibo para la Sala, que el apoderado admita que su representado manifestó que recibió la notificación, pero quiera restarle importancia a dicha aceptación, aduciendo que no indicó en que tiempo le llegó o cuando se enteró del proceso, pues, como ya se indicó, se acreditó la fecha en que se surtió por parte del juzgado la notificación, siendo claro que la notificación se entiende surtida transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezaran a correr a partir del día siguiente, conforme lo dispuesto en el artículo

8 del multicitado Decreto 806 de 2020, sin que sea procedente que el juzgado procediera con el emplazamiento de los demandados, en tanto que la notificación si se realizó exitosamente.

En igual sentido, tampoco resulta de peso el argumento de que si el accionado hubiera recibido la copia de la demanda desde el 22 de octubre de 2020, hubiera podido haber iniciado una defensa la cual no tuvo oportunidad, pues en primer lugar, si bien no le fue allegado copia del escrito de demanda el 22 de octubre de 2020, el mismo si le fue remitido el 2 de noviembre de dicha anualidad, oportunidad a partir de la cual bien pudo haber iniciado gestión para la defensa y en todo caso, una vez realizada la notificación por parte del Despacho, es el momento a partir del cual empiezan a correr los términos.

Al respecto, vale traer a colación lo señalado por la Corte Constitucional en la ya citada Sentencia C-420 de 2020, al anotar:

“Además, se advierte que: (i) el demandante tiene un término mayor para la elaboración de la demanda, diseño de su estrategia de litigio y recopilación de pruebas, solo limitado por el término de caducidad de la acción; por tanto, aquel, en todos los casos, es superior al término concedido por el ordenamiento al demandando para los mismos propósitos; (ii) el litigio realmente se traba con la notificación del auto admisorio de la demanda, por lo que sin importar las acciones que el demandado pueda adelantar de manera previa, la decisión de iniciar el proceso sigue a cargo de la autoridad judicial como rector del proceso, garante de la seguridad jurídica y de la publicidad de las actuaciones; (iii) los elementos esenciales del proceso están garantizados, habida cuenta de que las oportunidades procesales para exponer ante el juez las pretensiones, las excepciones, las pruebas y ejercer el derecho de contradicción de todas ellas siguen intactas bajo el diseño procesal que introduce la medida objeto de estudio; y (iv) la medida

examinada contribuye a la celeridad procesal, por cuanto el conocimiento antelado de la información por parte del demandado agiliza el trámite de notificación del auto admisorio de la demanda y su contestación”. (Subrayas de la Sala)

Por lo expuesto, concluye la Sala que no se configura causal de nulidad alguna, así como tampoco la afectación de los derechos constitucionales de defensa y contradicción de la parte accionada, razón por la cual es procedente CONFIRMAR la decisión apelada.

6. DECISION

En mérito de lo expuesto la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín,

RESUELVE

PRIMERO: Se **CONFIRMA** el auto proferido por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el 25 de febrero de 2022, dentro del proceso ordinario instaurado por el señor YEISON BERNARDO ALVAREZ MURILLO en contra de la sociedad INVERSIONES GAÑAN S.A.S. y el señor CARLOS ANDRES PÉREZ GAÑAN

Segundo: Sin **COSTAS** en esta instancia.

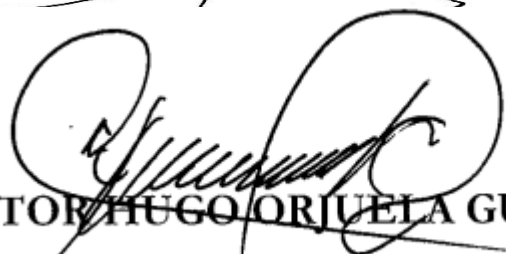
Tercero: Se ordena la devolución del expediente digital al Juzgado de origen, con la inclusión de las actuaciones cumplidas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**, de conformidad con el numeral segundo del literal c) artículo 41 del Código Sustantivo del Trabajo.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE


JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

La presente providencia fue notificada por estado No. 107 fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 21 de Junio de 2022.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario